Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores

Número 198 año V $5.00 27 de julio de 1981

El gobierno expulsó a otros 2 mil guatemaltecos

¡Fronteras abiertas para los refugiados!

¡Alto a la complicidad del gobierno mexicano con la dictadura de Lucas García!



Contra las exigencias reiteradas de amplios sectores de la población, pisoteándolas abiertamente, en días pasados el gobierno mexicano expulsó de la zona fronteriza de Chiapas a cerca de 2 mil refugiados guatemaltecos que huían de las sistemáticas matanzas perpetradas por la dictadura de Lucas García.

En un demagógico comunicado, la Secretaría de Gobernación intenta ocultar esta acción, que sólo puede ser calificada de criminal, anunciando que se les ha otorgado asilo político a las únicas cuarenta y seis personas que, según la secretaría, se comprobó "peligran en su integridad física", en tanto que "el resto de las personas que se encontraban en Chiapas retornó a su lugar de origen".

Los campesinos guatemaltecos no "retornaron", como dice Gobernación; fueron expulsados por el ejército pese a los angustiosos ruegos que hicieron, pues son conscientes de la suerte que les espera en ese inmenso campo de concentración en que se ha convertido a Guatemala.

No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que "peligra la vida" no sólo de las cuarenta y seis personas a las que se concedió asilo, sino de todas las que se habían refugiado en nuestro país. Y el gobierno mexicano no puede alegar ignorancia sobre las matanzas cotidianas que tanto el ejército como los incontables grupos paramilitares de la dictadura realizan en Guatemala: diariamente aparecen en los campos y ciudades de ese vecino país decenas de cadáveres de personas a las que previamente se sometió a las más crueles torturas.

Igualmente, es ridículo "pedir seguridades" a las autoridades guatemaltecas de que respetarán a las personas que el gobierno mexicano ha expulsado. Porque no son "arbitrariedades" o "excesos" cometidos por los cuerpos represivos lo que está sucediendo en Guatemala; se trata de toda una planificada política criminal llevada a cabo por el propio régimen guatemalteco que, con el apoyo del imperialismo norteamericano, le ha declarado la guerra a su pueblo como la única forma de mantenerse en el poder; se trata de la aplicación en una escala monstruosa de las técnicas "científicas" de represión al estilo de los manuales yanquis de contrainsurgencia.

Para la dictadura guatemalteca, todo el pueblo es "sospechoso" de subversión, todo el pueblo es guerrillero en potencia; persigue mantenerlo paralizado por medio del terror para que no preste ayuda o se una a las organizaciones revolucionarias que con las armas en las manos combaten a la dictadura y organizan a su pueblo. La oligarquía guatemalteca sostiene las mismas teorías que la salvadoreña, la cual proclama que matando a 50 ó 100 mil "comunistas" se acaba el problema.

El gobierno mexicano pretende ocultar esta realidad y, amparándose en formalidades mañosas ("se realizan investigaciones", "la mayoría buscaba mejorar su condición económica", etc.), manda sin contemplación al matadero a centenares de refugiados. Y esta afirmación no se basa solamente en lo que hemos explicado más arriba. Existe ya una dolorosa experiencia de las consecuencias de este proceder por parte del régimen de López Portillo. En efecto, al margen de muchos otros casos menos conocidos, ésta es la segunda vez que el gobierno expulsa masivamente a refugiados guatemaltecos. Hace sólo poco más de un mes fueron expulsados de nuestro país alrededor de 400 guatemaltecos, los cuales habían hecho una penosa travesía para cobijarse con la solidaridad mexicana de la feroz represión de Lucas García. A pesar de que se dieron "garantías" de que nada les sucedería, pocos días después muchos de ellos murieron asesinados a manos de los cuerpos represivos de la dictadura, quizas precisamente por haber cometido el crimen de solicitar asilo y exponer la situación que priva en su país, pero seguramente porque el gobierno mexicano los entregó de la manera más conscientemente criminal.

De esta forma, el gobierno mexicano se ha hecho cómplice de la dictadura guatemalteca. Ello hace pensar en la existencia de acuerdos, formáles o no, entre ambos gobiernos. De esta forma, también, toda la palabrería del régimen de JLP en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y la violación de los derechos humanos en Centroamérica cae por los suelos.

En el colmo de la demagogia y el cinismo, González Guerara —Subsecretario de Gobernación— declaró pocós días después de la deportación que "México mantendrá abiertas sus fronteras a los refugiados políticos que lo demanden". Por supuesto, inmediatamente después reafirmó que el gobierno continuará con lo que es su verdadera política criminal bajo el pretexto de que se "limitará el acceso a los inmigrantes económicos". El pueblo mexicano debe exigir con energía que las fronteras de nuestro país estén realmente abiertas para todos aquellos que busquen refugio del baño de sangre que tiene lugar en Centroamérica; que se hagan públicos los acuerdos que existen entre el gobierno mexicano y la dictadura guatemalteca; que se les ponga fin, lo mismo que a cualquier tipo de ayuda que México esté proporcionando a ese régimen sanguinario.

El gobierno mexicano ha mostrado de qué lado de la barricada se encuentra. Sólo los trabajadores pueden obligarlo a no cometer más crímenes contra los refugiados; no deben dejarse engañar con el truco de que éstos les robarán su trabajo, pues los culpables del desempleo son el gobierno y los patrones de nuestro propio país. La solidaridad de pueblo a pueblo es la mejor solidaridad. Redoblemos nuestros esfuerzos para hacer llegar a los luchadores de los pueblos centroamericanos el más amplio apoyo político y material. La victoria de las luchas de liberación que tienen lugar en Centroamérica es la única solución posible para los pueblos de esa región.

¡Fronteras abiertas para los refugiados! ■

Cuernavaca: obreros automotrices en lucha

Revisión contractual en Ford

Ver página 3

El triunfo de Fernández, un importante retroceso para el SME

La desmovilización sindical paralizó a la oposición

Por Marcos Huerta

Como se informó en Bandera Socialista, a fines de junio pasado se llevó a cabo la elección de medio Comité Central (CC) del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la que la principal cartera que se jugaba era la de Secretario General. En las votaciones, la planilla encabezada por Manuel Fernández —Secretario General saliente— obtuvo poco más del cincuenta y cuatro por ciento de un total de alrededor de 26 mil votos emitidos contra, aproximadamente, el veintitrés por ciento alcanzado por la planilla encabezada por José Luis Nájera, el trece por ciento logrado por la de Carlos Valero, el tres por ciento obtenido por la lidereada por Flores Correa y un siete por ciento de votos en blanco.

Estos resultados constituyen un triunfo del grupo de Manuel Fernández más fácil y contundente del que se esperaba. Sin duda, la votación alcanzada por el grupo de Fernández, miembro distinguido del Partido Popular Socialista (PPS) —una de las más altas votaciones obtenidas por una planilla en los últimos años—, fortalecerá al interior del Comité Central del SME a la corriente oficialista de la burocracia. Asimismo, esta votación representa la puntilla al proyecto de alternativa a la política de Fernández y compañía que pretendió ser el grupo Unidad Sindical.

¿Qué hay detrás de estos resultados?

A primera vista, en efecto, los resultados de la votación pueden parecer apabullantes. Sin embargo, es necesario revisar los antecedentes de estas elecciones para ver hasta qué punto sus resultados representan, efectivamente, un viraje brusco en el proceso de concientización que había iniciado la base electricista hacia posiciones más democráticas y combativas.

En los últimos tiempos, las elecciones que año con año se realizan en el SME para renovar a medio Comité Central han sido un reflejo de los agudos y contradictorios procesos que vive el sindicato ante la perspectiva de la integración de la industria eléctrica —la absorción total de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)— y la consiguiente unificación sindical del SME y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

En efecto, después de casi ocho años de control torresordoñista, durante los cuales la burocracia logró mantenerse unida y contar con el consenso de la base, en 1977 dicho control se vino abajo debido a las denuncias de corrupción que en contra de la dirección se presentaron y a la agudización de los problemas derivados de la integración industrial. Este hecho generó en los años posteriores la división y la polarización de las tradicionales posiciones de la burocracia, así como un proceso que vino a golpear la conciencia tradicionalmente economicista y gremialista de la base del SME, la cual, después de años de seguridad laboral y aislamiento político, empezó a enfrentar el creciente debilitamiento de su sindicato y la crisis de su dirección.

Sin embargo, el proceso de ruptura de la base con la corriente torresordoñista no fue tajante ni inmediato; la falta de alternativas fuertes y el peso mismo de la tradición del sindicato dificultaron el hecho. Experiencias confusas como la representada por Téllez Rincón —que pretendió ser una opción por fuera de la corriente burocrática oficial— hicieron más cautos a los trabajadores frente a opciones nuevas. Sin embargo, paulatinamente, se fue dando un proceso de orientación de la base hacia la izquierda, el cual se reflejó en la creciente movilización de sectores importantes del sindicato, en la progresiva eliminación del CC de los elementos más claramente proempresistas —Julio Pineda, Fuentes Briseño, Ernesto Jiménez, etc.—, así como en la creciente base social que fueron adquiriendo las corrientes independientes y democráticas.

Electoralmente, esto se expresó en un principio en la aparición de muchas planillas, en su mayoría representantes de los diferentes grupos que en ese entonces coexistían al interior de la propia corriente oficial. Así, en 1978 y 1979 llegaron a contender, respectivamente, cinco y seis planillas. En estos años, si bien el abstencionismo fue alto, las planillas que pretendían presentar una opción progresiva ante los problemas del sindicato fueron ganando votos, en detrimento de las opciones más claramente proempresistas y corruptas. De esta forma, las corrientes democráticas obtuvieron votaciones que fueron desde los 2 mil hasta los 4 mil votos. Sin embargo, las votaciones por éstas obtenidas continuaron estando por debajo de las logradas por otras planillas.

Estos hechos provocaron reagrupamientos al interior de la burocracia. Por un lado, el sector continuista de la corriente oficial —que basa su política en la idea de que aun después de la unificación con el SUTERM el sindicato podrá mantenerse tal y como está, y de que es factible seguir obteniendo buenos aumentos salariales y negociar la solución de los problemas del sindicato sin necesidad de recurrir a la movilización— buscó ganar a elementos no desprestigiados. Por otro lado, un sector de la burocracia menor buscó presentarse como alternativa apoyándose en los elementos populares que habían venido ocupando puestos secundarios en la dirección, así como retomando las demandas más importantes de la base y reconociendo la necesidad de enfrentar los problemas de la integración del sector eléctrico y la unidad sindical en términos diferentes a los presentados por la corriente oficial.

Estos reagrupamientos se expresaron electoralmente. Así, en 1979 Fernández —que obtuvo 10 mil votos— triunfó sobre Nájera por un escaso millar de sufragios. Al año siguiente, consolidada la alianza de la corriente representada por Nájera con el Bloque de Lucha Sindical (BLS) —la más importante corriente democrática— como grupo Unidad Sindical, éste obtuvo 12 mil votos —contra 9 mil conseguidos por Fernández— y nueve puestos en el CC. Por primera vez, una opción progresiva recibía más apoyo que la oficial.

Desafortunadamente, en 1981 no se repitió el triunfo sobre la corriente fernandista, que hubiera significado su total desplazamiento del CC. Por el contrario, en este año Fernández no sólo recuperó los 3 6 4 mil votos por los que había perdido el año pasado, sino que además logró atraer a algunos de los sectores que tradicionalmente se abstenían de votar.

Así, si bien tanto la oposición en su conjunto como la corriente oficialista mantuvieron sus bases tradicionales, la oposición perdió el apoyo de aquellos trabajadores que el año pasado habían tenido expectativas en torno a la política alternativa por ésta representada. ¿Por qué sucedió esto?

Fernández desmoviliza y la oposición se paraliza

En el último año, Manuel Fernández logró imponer toda una política de desmovilización al SME, desmovilización que fue el terreno propicio para su actual triunfo electoral. Con el apoyo de la empresa y del aparato sindical desarrolló toda una campaña de desinformación en torno a la magnitud de los problemas del sindicato. A los departamentos movilizados por problemas propios logró contenerlos temporalmente mediante promesas o merced al aislamiento de los elementos más radicales. El aumento salarial conseguido durante la última revisión y la firma de diversos convenios departamentales fueron presentados por él como verdaderos triunfos y como pruebas de lo acertado de su política —de que es preferible negociar y "actuar responsablemente" que movilizar. Inclusive, llegó al extremo de afirmar que el SME había recuperado la subestación de Topilejo, siendo que ésta sigue estando en manos del SUTERM. Finalmente, Fernández siguió sembrando las ilusiones de que con todo y la integración de la industria eléctrica será posible mantener al SME como hasta ahora.

Sin embargo, no es posible atribuir los avances de Fernández únicamente a la política implementada por la burocracia sindical; por el contrario, a ello contribuyó la paralización que caracterizó al sector democrático. Así, los elementos de Unidad Sindical cercanos a Nájera que llegaron al CC no supieron asimilar el significado real de su arribo, que atribuyeron más a su popularidad, a su supuesto "carisma", que a la opción política que en esos momentos representaba la coalición opositora. En esa medida —salvo en los momentos en que al interior de Unidad Sindical el BLS logró una definición política del proyecto que representaba—, la mayoría de sus miembros en el CC fue mostrando, poco a poco, una creciente inconsecuencia con respecto a los planteamientos originales de la coalición. Entonces, su presencia en el CC se limitó a "cuidar la figura", a denunciar casos menores de corrupción, lo cual estos elementos pensaban sería suficiente para dar el "salto" definitivo en 1981. En ningún momento se hizo una crítica global a la política de Fernández ni, mucho menos, se presentaron soluciones alternativas a los problemas candentes del sindicato.

Esto sumió a Unidad Sindical en un forcejeo permanente entre el BLS y el grupo nucleado por Nájera, esto es, en un forcejeo entre los que pugnaban por una clara definición política y los que consideraban que guardando silencio y moderación podían seguir presentándose como alternativa. Lógicamente, esto paralizó a Unidad Sindical, que limitó su acción a la publicación de algunos volantes en torno a asuntos generales y al debate al interior de las asambleas generales, donde la participación del grueso de la base es prácticamente nula. Evidentemente, todo ello jugó a favor de la política de Fernández, ya que al limitar la oposición su política al debate al interior de las asambleas —donde además era contrarrestada por la fuerza del aparato e, incluso, a través del "porrismo"— Fernández tuvo campo libre para presentarse como única opción y para "fabricarse" sus propios triunfos. Un ejemplo de esto lo es el hecho de que, a pesar de haberse votado en asamblea —y en contra de lo propuesto por Fernández— la constitución de la Comisión Legislativa para la Unidad y la Integración, este triunfo de la oposición pasó inadvertido para el grueso de la base, como lo demostró su escasa participación en la votación para elegir a los legisladores.

Así, el reciente triunfo electoral de Fernández, más que un triunfo sobre una alternativa de oposición, se dio por la inexistencia de la misma. Las planillas de oposición poco pudieron hacer en dos semanas de campaña ante lo capitalizado por Fernández en más de un año.

Por su parte, Unidad Sindical, inevitablemente, pasó de la parálisis a una profunda crisis, para la cual fueron determinantes no sólo la inconsecuencia de la corriente aglutinada en torno a Nájera, sino también los errores en que, inconscientemente, fue cayendo el BLS.

Lecciones de una alianza

Desde nuestro punto de vista, el BLS mantuvo una política correcta al buscar y concretar la alianza que se plasmó en Unidad Sindical. Las bases políticas de la alianza y el hecho mismo de presentar una opción unitaria de oposición posibilitaron el aglutinamiento de nuevos sectores de la base. Sin embargo, los errores cometidos en lo referente a las bases y al funcionamiento de dicha alianza rápidamente estancaron y desvirtuaron sus propósitos.

Al interior de Unidad Sindical, el BSL representaba a los sectores de base más combativos y radicales del SME y, por tanto, era el elemento definitivo para mantener la alianza en una línea consecuente. Sin embargo, para que el BLS haga valer su fuerza no basta con que reúna a decenas de representantes sindicales ni con que se dedique a la búsqueda de definiciones a partir de meras discusiones entre cuatro paredes. Como vanguardia, el BLS debió expresar su fuerza a través de la movilización del sindicato en general y de su propia base social en particular. Así, a pesar de haber mantenido su autonomía organizativa y política, el BLS cometió el error de no utilizarla para desarrollar la movilización, para presentar su proyecto en cada centro de trabajo y para, sobre estas bases, hacer valer su presencia al interior de Unidad Sindical y en el conjunto del sindicato.

El ejemplo más claro y patético de esto se dio en una de las pocas y quizás la más importante movilización de este año: el "plantón" que el Departamento de Líneas Aéreas realizó ante la Secretaría General del SME. El BLS reaccionó tardíamente y sólo en los últimos días llevó a cabo una raquítica movilización de solidaridad, mientras que los miembros de Unidad Sindical en el CC apoyaban la ambigua y mediatizadora resolución de Fernández que obligó a los compañeros de Líneas Aéreas a levantar su "plantón" después de haberlo sostenido por casi dos semanas.

Ante este hecho, la crisis que ya

(Pasa a la página 3)

directorio

Bandera Socialista

Organo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, Sección Mexicana de la Cuarta Internacional). Por acuerdo de la Comisión Federal Electoral, el PRT obtuvo su registro como Partido Político Nacional el 11 de junio de 1981.

Director: Héctor de la Cueva.
Consejo de Redacción: Manuel Aguilar Mora, Arturo Anguiano, Alfredo López; Margarito Montes Parra, Ricardo Pascoe, Sergio Rodríguez, Edgard Sánchez.
Equipo Técnico: Valentín González, Enrique Hernández, Agustín del Moral, Francisco Ramírez, Martha Rodríguez, Victoria Romo.
Fotografía: Ma. Esther Alvarado, Eduardo Lugo.
Administración: Ruth Betancourt.
Domicilio de la Redacción y de la Administración: Baja California 71, Colonia Roma, México 7, DF. Teléfono: 584 9208. Impreso en Litho Balumcanán, teléfono 763 1275.

Los artículos firmados no expresan necesariamente el punto de vista de esta publicación. Bandera Socialista aparecerá todos los lunes de 1981 excepto el 5 de enero, el 13 de abril, el 14 de diciembre, el 21 de diciembre, el 28 de diciembre, y los lunes que coincidan con la realización de la escuela de cuadros y el congreso del partido programados para este año y cuyas fechas exactas daremos a conocer posteriormente. Toda correspondencia debe ser enviada a nombre del Director al Apartado Postal 11-423, México 11, DF.

Suscripciones en la República Mexicana. Por correo ordinario de tercera clase (sobre abierto): seis meses $120.00 MN; por correo ordinario de primera clase: seis meses $180.00; por correo aéreo: seis meses $150.00.
Suscripciones al exterior de la República Mexicana. Por seis meses, correo aéreo de tercera clase: Norteamérica, posesiones de EUA, Centroamérica y Las Antillas: $10.00 US Dlls.; Sudamérica: $8.50 US; Europa: $15.00 US.
Las suscripciones por un año cuestan el doble de las de seis meses.

Cierre de esta edición: 21 de julio.

El 31 de julio vence el emplazamiento a huelga en la Ford

Por Isaac Mar y Erik Ludieros

A las 24:00 horas del próximo 31 de julio vence el plazo estipulado para las pláticas de revisión contractual entre la empresa automotriz transnacional Ford Motor Company y el Sindicato de Trabajadores de Ford (SINTRAFORD). Entre otras demandas, el sindicato exige un incremento salarial de cuarenta por ciento, el pago por parte de la empresa del Impuesto sobre Productos del Trabajo (ISPT), el incremento del monto del reparto de utilidades de un ocho a un veinte por ciento, un cupón semanal por mil 500 pesos para la compra de artículos de primera necesidad, un incremento al fondo de ahorro, y que a lo largo de la jornada de trabajo se conceda a los trabajadores de línea dos periodos de descanso de diez minutos cada uno para reponer energías.

Sin embargo, las condiciones internas en las que el SINTRAFORD enfrenta la revisión contractual no son precisamente las mejores. Así, de principio hay que mencionar el descontento de la base del sindicato ante el incumplimiento, por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Comité Ejecutivo Local de Villa, de los acuerdos tomados en la asamblea general del 13 de junio (de la que informamos en **Bandera Socialista** número 195). En dicha asamblea se acordó realizar una nueva auditoría al CEN y efectuar una asamblea en Villa que permitiera resolver el caso del compañero J. Rangel Rojo. Este descontento ha marcado los dos últimos meses de la revisión contractual. Sus momentos más álgidos se expresaron en las combativas movilizaciones que los trabajadores de la sección Villa realizaron durante la última semana de julio, cuando se presentaron varias veces ante las oficinas del Comité Ejecutivo Local para exigir, precisamente, la realización de la asamblea. Ante la negativa del Comité Ejecutivo Local de realizar la misma, los trabajadores suspendieron durante tres sábados consecutivos los llamados "sábados productivos" (jornadas de tiempo extra obligatorio acordadas entre la empresa y el sindicato). Finalmente, para eliminar la presión que esta medida representaba, la empresa decidió suspender los "sábados productivos".

Significativamente, a lo largo del movimiento los trabajadores han visto desfilar ante ellos, uno por uno, a la mayor parte de los miembros del Comité Ejecutivo Local, quienes con argucias y maniobras han tratado de convencerlos de que desistan de su lucha.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional, previendo el grave peligro que para sus intereses representaría el hecho de que el ejemplo de Villa fuera seguido por las otras secciones del sindicato, ha iniciado, en contubernio con la empresa, una intensa y sistemática campaña de desprestigio y amedrentamiento en contra de los compañeros que más se han distinguido en la lucha. Esta campaña ha sido instrumentada a través de volantes anónimos y memorandums que con toda libertad circulan al interior de las plantas y los comedores de la empresa, lo que contrasta con la persecución policiaca y gangsteril en contra de los compañeros que se han atrevido a distribuir cualquier volante de oposición o crítica a la política de la dirección sindical. Asimismo, la empresa ha empezado a sancionar a los trabajadores que participan decididamente en la lucha.

Para los trabajadores ha quedado claro el papel divisionista que el Comité Ejecutivo Nacional ha venido jugando. Este ha llegado al extremo de acusar a los trabajadores de la sección Villa de entorpecer las negociaciones con la empresa, con el propósito de generar el repudio hacia ellos por parte del resto de las secciones del sindicato. Igualmente, el CEN anticipa así un posible "chivo expiatorio" a quien culpar en el muy probable caso de que acuerde con la empresa, a espaldas de los trabajadores, reivindicaciones inferiores a las exigidas en el pliego petitorio.

En este punto, cabe mencionar que, desafortunadamente, el carácter democrático del movimiento surgido en la sección Villa no ha podido hacerse extensivo al proceso de revisión contractual. Así, lejos de darse una mayor participación de la base, de realizarse asambleas de información y discusión, de haberse elegido democráticamente un comité de huelga, etc., hasta ahora el proceso de revisión contractual se ha caracterizado por su verticalidad y su antidemocracia, con lo que se han mantenido las condiciones para que el CEN llegue nuevamente a un acuerdo con la empresa a espaldas de los trabajadores.

Los trabajadores deben estar vigilantes del proceso de revisión contractual, ya que las reivindicaciones que están en juego son de gran importancia. Así, por ejemplo, obtener la satisfacción de las demandas de que la empresa absorba el pago del ISPT y de que se incremente a un veinte por ciento el monto del reparto de utilidades es indispensable para compensar, así sea en grado mínimo, el aumento del costo de la vida, lo que no sucedería aun en el caso de que se alcanzara el cuarenta por ciento de aumento salarial, pero nada más.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) llama a las más amplias participación y unidad de los trabajadores tanto para echar abajo las maniobras del Comité Ejecutivo Nacional como para exigir un proceso democrático de revisión contractual. La movilización y la organización democrática de los trabajadores, de las que han puesto el ejemplo los compañeros de la sección Villa, son la única garantía de una revisión contractual exitosa. El PRT se compromete desde ahora a brindar la más amplia solidaridad a esta lucha.

Cuernavaca: obreros automotrices en lucha

Por Abel Moreno

En reciente asamblea general, los miembros del Sindicato Unico Independiente de Trabajadores de Industria Automotriz de Cuernavaca (SUITIAC) acordaron exigir a la empresa un aumento salarial del cuarenta por ciento, la semana laboral de cuarenta horas, el pago por parte de la empresa de las cuotas al Seguro Social y la eliminación de la ambigüedad existente en la redacción de diversas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, ambigüedad que facilita la interpretación de las mismas en favor de los intereses de la empresa. Asimismo, los más de 800 trabajadores de Industria Automotriz de Cuernavaca SA (IACSA) manifestaron su determinación de estallar el movimiento de huelga si al término de la revisión contractual —el primero de septiembre— la empresa no responde satisfactoriamente a las demandas planteadas.

La Comisión Revisora está integrada por los delegados departamentales. A su vez, corresponderá a éstos y al Comité Ejecutivo del sindicato designar a los responsables del Comité de Huelga. En una plática que sostuvimos, el compañero Bahena —Secretario de Trabajo y Conflictos del SUITIAC— nos dijo que las perspectivas de la lucha son favorables, ya que, si bien la empresa continúa en su empeño de desaparecer al Departamento de Pernos —lo que significaría el despido automático de veintisiete obreros—, por otra parte ha tenido que retroceder en su ofensiva represiva y reinstalar a dos delegados obreros que había despedido.

La tradición de lucha de los obreros de IACSA —desarrollada en más de siete huelgas estalladas desde 1974 hasta la fecha— y las estructuras democráticas de participación existentes al interior del sindicato son las bases de la confianza con que el mismo enfrenta la revisión contractual.

¿Y NISSAN?

Sin embargo, no es posible descartar una nueva ofensiva de la patronal, pues ésta se ha dado la política de golpear a los bastiones del movimiento obrero en la región. Es necesario no confiarse y recurrir siempre a la organización y a la movilización.

Precisamente, el despido, a partir del mes de febrero, de más de 215 obreros de la empresa NISSAN muestra hasta qué grado la patronal está dispuesta incluso a sacrificar la producción a corto plazo en aras de minar y, si es posible, destruir a los sectores más avanzados, resueltos y combativos del sindicato.

No obstante, los compañeros despedidos de NISSAN siguen luchando por su reinstalación. Su argumento fundamental —como nos lo han manifestado Alvaro Cuevas y Carlos Contreras, secretarios de Trabajo y General, respectivamente, ambos despedidos— es que se trata de un despido de carácter político, de una medida represiva que la transnacional japonesa opuso a la lucha de los obreros contra los incrementos en los ritmos de trabajo y contra las violaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.

El resultado es que ahora "el interior de la planta es un infierno", como nos han dicho varios obreros que aún laboran en NISSAN. "Nos exigen una producción que es imposible sacar. Hay compañeros que gritan cuando el cansancio les impide continuar; unos, incluso, se han desmayado", nos dijo un compañero del Departamento de Ensamblado.

Sin embargo, las audiencias en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se prolongan. Las autoridades, con Rodolfo Echeverría a la cabeza, se han limitado a darle largas al asunto, tratando de debilitar aún más al movimiento.

Por su parte, el Comité Ejecutivo impuesto, asesorado por Ortega Arenas —dirigente de la Unidad Obrera Independiente—, se niega a realizar asambleas generales, y ha suspendido las asambleas departamentales y los plenos de delegados; se mantiene sólo en base al apoyo de la empresa y la STPS.

¿Qué alternativas existen?

Desafortunadamente, la política instrumentada por la empresa y la dirección sindical ha empezado a mellar la lucha. Hay obreros que se han desmoralizado; algunos de los vigilantes y de los obreros despedidos han terminado por aceptar su liquidación. No obstante, aún se mantiene un alto grado de participación y se realiza una continua labor de propaganda hacia el interior de la fábrica. Poco a poco se reorganizan las fuerzas democráticas.

Remontar la cuesta no será labor fácil. La primera tarea será fortalecer la solidaridad de todos los sindicatos con los despedidos. Asimismo, se deberá aprovechar la coyuntura de elecciones de Comité Ejecutivo que según los estatutos deberán realizarse en el mes de noviembre. Es indispensable, igualmente, revitalizar a la Coordinadora de Sindicatos del Valle de Cuernavaca a través de movilizar fuerzas en apoyo a la revisión de Contrato Colectivo de Trabajo en IACSA, al emplazamiento a huelga por violaciones al contrato de trabajo en la universidad y a la lucha por el reconocimiento del Comité Ejecutivo electo democráticamente de la Sección Décimonovena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este será un aspecto decisivo para fortalecer la lucha en los centros industriales y, particularmente, para devolver el golpe en NISSAN. ■

...retroceso para el SME

(Viene de la página 2)

vivía Unidad Sindical se profundizó aún más. El grupo de Nájera avanzó hacia posiciones puramente electorales y oportunistas, acicateado por el temor que le crearon las presiones y exigencias de moderación que el gobierno hizo a los dirigentes de los dos sindicatos electricistas. Así, Nájera y compañía terminaron por aliarse al corrupto Ernesto Jiménez y, en consecuencia, Unidad Sindical se escindió poco antes de las elecciones (ver **Bandera Socialista** número 193).

La nueva perspectiva

Pese a que el retroceso de la oposición permite un respiro a Fernández —ya que, temporalmente, aleja la posibilidad de que la corriente oficialista pierda el control del sindicato—, las condiciones al interior del mismo no han variado. Fernández no ha dado solución a los graves problemas que representan las violaciones contractuales y departamentales, y mucho del apoyo logrado lo consiguió sólo con promesas vanas en el sentido de que, tarde o temprano, se pondrá un alto a las mismas.

Por lo pronto, la ventaja con que cuenta Fernández es la de que, mientras logre mantener desmovilizado al grueso del sindicato, la iniciativa en lo relativo a la unidad sindical será del gobierno y los "charros". Pero esto es al mismo tiempo el riesgo más grande para el SME, que hoy más que nunca se encuentra desarmado.

Ante esta situación, la oposición enfrenta la responsabilidad de reubicarse en el terreno de las movilizaciones y de actuar en los conflictos departamentales —de retomar el trabajo de base—, así como la de concretar una alternativa ante el problema de la unidad sindical. Esto, sin embargo, no podrá hacerse ya a través de una alianza del tipo de Unidad Sindical.

Hoy, el Bloque de Lucha Sindical deberá replantearse su política de alianzas a partir de las principales enseñanzas que dejó la experiencia de Unidad Sindical. Dadas las actuales condiciones, una política correcta le permitiría al BLS recuperar terreno rápidamente, así como realizar alianzas que, aunque limitadas, podrían funcionar sobre una base más firme. El peor error que hoy podrían cometer las fuerzas democráticas del SME sería sobrevalorar el triunfo de Fernández y, ante el temor a la represión y en vista del aislamiento, realizar alianzas "defensivas" y no alianzas que posibiliten la movilización generalizada de la base del sindicato.

Irlanda: continúan muriendo huelguistas de hambre

Las cadenas de Irlanda son también las de la clase obrera británica

Por José Luis F. H. Ayala

De un momento a otro se espera la muerte de los revolucionarios irlandeses Kevin Linch y Kievan Doherty, en huelga de hambre desde hace más de sesenta días. El motivo de la huelga es bien conocido: la obstinada negativa del gobierno británico a reconocer que los luchadores por la liberación de Irlanda son luchadores políticos y que al caer en prisión se les debe dar el trato correspondiente a dicha condición. De morir Linch y Doherty, el número de víctimas de la intransigencia de la Primera Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, se elevaría a ocho.

En todo el mundo, la causa de los huelguistas de hambre irlandeses ha ganado un amplio apoyo. Por ejemplo, en los puertos de Estados Unidos los estibadores boicotearon el desembarco de los cargamentos procedentes de Gran Bretaña; en Nueva York, miles de manifestantes consiguieron boicotear la visita del príncipe Carlos a esa ciudad.

Pero ha sido fundamentalmente en la propia isla de Irlanda, tanto en Irlanda del Norte como en Irlanda del Sur, en donde se han realizado continuas movilizaciones en apoyo a los nacionalistas presos. Las movilizaciones en Dublín, capital de Irlanda del Sur, han sido las más combativas realizadas en los últimos siete años en esa región. Sin embargo, las multitudinarias movilizaciones efectuadas en Irlanda del Norte han sido reprimidas por los cuerpos represivos al servicio del imperialismo británico. En estas acciones han perecido también decenas de nacionalistas irlandeses y varios cientos han sido heridos.

Intransigencia y más intransigencia

Desde que Robert Sands inició —el pasado primero de marzo— la actual cadena de huelgas de hambre, el gobierno británico ha mostrado una criminal intransigencia. Así, en abril pasado, durante un viaje por Medio Oriente, la señora Thatcher dijo: "No puede hablarse de estado político para alguien condenado por un crimen...un crimen es un crimen". Sin embargo —aunque la lucha de un pueblo por su liberación, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, no puede ser calificada como un crimen—, cabe aclarar además que a ninguno de los huelguistas de hambre se le detuvo bajo la acusación de haber cometido un crimen, sino bajo las de poseer armas y militar en el Ejército Republicano Irlandés (ERI).

Ahora, la —esa sí— criminal intransigencia del gobierno británico ha obligado a los presos políticos irlandeses a rebajar sus demandas. De esta forma, actualmente ya no exigen el reconocimiento del carácter de presos políticos, sino tan sólo la exención del trabajo penal obligatorio, y el derecho a vestirse con sus propias ropas y a reunirse en pequeños grupos.

Para mejorar su deteriorada imagen, el gobierno británico aparenta haber también cedido un poco. Así, el secretario británico para Irlanda del Norte expresó en un comunicado oficial la promesa del gobierno británico de modificar la vida al interior de las prisiones si los huelguistas de hambre suspendían su "presión suicida".

Sin embargo, estas promesas no son nuevas. El año pasado, a raíz de una huelga de hambre, el imperialismo británico aceptó mejorar la vida interna de las prisiones. Fue precisamente el incumplimiento de esta promesa lo que llevó a Robert Sands a reiniciar la huelga de hambre. El actual rechazo del gobierno británico a la mediación de parlamentarios irlandeses y de representantes de la Cruz Roja Internacional, así como a negociar directamente con los huelguistas, muestra que, en realidad, tiene muy poco interés en deponer su intransigencia.

Siglos de opresión británica

La actual lucha de los presos políticos irlandeses es sólo un episodio más de la lucha que por ocho siglos ha librado el pueblo irlandés en contra del dominio británico.

La conquista y la colonización de Irlanda por Gran Bretaña se iniciaron en el año de 1172, cuando el rey Enrique II se apoderó del sur de esa isla. Treinta años antes, el papa Adrián IV había promulgado una bula que confería a Enrique II el título de Gobernador Supremo de Irlanda, a cambio de la promesa de éste de someter a la iglesia irlandesa a Roma. Esta fue la justificación para la posterior invasión de Irlanda.

Cuatrocientos años más tarde, a raíz del rompimiento de la iglesia anglosajona con Roma, el papa Gregorio XIII declaró que la reina Isabel I había perdido el derecho a la corona irlandesa. A partir de entonces, la lucha de los irlandeses contra la opresión británica tomaría la forma de un conflicto religioso entre católicos y protestantes.

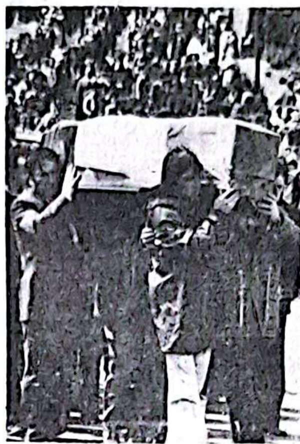
Correspondió nada menos que a Marx y Engels poner de manifiesto el significado de la dominación británica sobre Irlanda y, a partir de ahí, esbozar los rasgos que debía adoptar la lucha de liberación del pueblo irlandés. En primer lugar, hicieron notar que el principal motivo de la colonización había sido el arrebatarles a los irlandeses sus fértiles tierras. "Irlanda sirve para proyectar fuera de Inglaterra el hambre de tierra que afectaba a la clase media del campo inglés".

Marx denunció que durante años Gran Bretaña había utilizado a Irlanda como un "distrito agrícola...(que) la abastece de cereal, lana, ganado, reclutas industriales y militares". La especialización forzada de Irlanda como país agrícola en aras de las necesidades y los intereses de la metrópoli minó las posibilidades de su desarrollo industrial. A fin de cuentas, ésta es la razón de que Irlanda siga siendo un país atrasado. Igualmente, la opresión de Irlanda jugó un rol importante para la industrialización de Gran Bretaña.

Para los irlandeses, la dominación británica ha significado la pérdida de sus tierras; la conversión en arrendatarios de sus propios terrenos; la obligación de profesar la religión protestante, y de negar todo su pasado y toda su cultura; y —en las numerosas ocasiones en que se han rebelado— cientos de miles de muertos.

La burguesía divide a la clase obrera

El mantener al pueblo irlandés en la miseria le ha permitido a la burguesía inglesa disponer de mano de obra barata que, en su momento, utiliza en contra de los intereses del propio proletariado inglés. Como Marx explicó en 1870, "La burguesía inglesa no sólo ha aprovechado la miseria irlandesa para empeorar la situación de la clase obrera en Inglaterra a través de la emigración forzada de los irlandeses pobres, sino que además ha dividido al proletariado en dos campamentos enemigos...en todos los grandes centros industriales de Inglaterra



reina un antagonismo profundo entre el proletariado irlandés e inglés. El obrero inglés corriente odia al irlandés como a un competidor que hace bajar los salarios y el nivel de vida. Frente a él experimenta antipatías nacionales y religiosas... La burguesía mantiene despierto y atiza en forma artificial este antagonismo entre los proletarios en la propia Inglaterra. Sabe que esta división es el verdadero secreto para conservar su poder.

"Además, Irlanda es el único pretexto que tiene el gobierno inglés para mantener un gran ejército permanente al que —en caso de necesidad, como ya se ha mostrado— lanza sobre los trabajadores ingleses, después de haberlo educado y transformado en soldadesca en Irlanda... Finalmente, se repite en Inglaterra de nuestros días lo que la antigua Roma nos mostró en escala colosal. El pueblo que esclaviza a otro forja sus propias cadenas."

Las últimas informaciones en torno al actual conflicto confirman nuevamente lo señalado por Marx. Hoy en día, el gobierno británico envía a jefes de la policía a "entrenarse" en Irlanda del Norte para, posteriormente, reprimir a los desempleados y a las minorías étnicas que protestan por la política antiobrera y racista del gobierno de Margaret Thatcher.

Como vemos, la lucha del pueblo irlandés no puede ni debe ser vista como una lucha ajena a los intereses de la población de Gran Bretaña. Si el gobierno de Margaret Thatcher logra infligir una nueva derrota a la lucha de los nacionalistas irlandeses, la burguesía británica encontrará mejores condiciones para enfrentar favorablemente al proletariado inglés. De esta forma, las mismas armas que hoy están siendo utilizadas en contra del pueblo irlandés pueden usarse mañana contra los propios trabajadores británicos. Desafortunadamente, el Partido Laborista británico —a pesar del avance de su ala izquierda— no ha asumido esta realidad histórica al no dar su apoyo a los republicanos irlandeses, y esto puede costarle aún más caro al proletariado británico.

El hecho es que cada día que pasa la intransigencia británica cobra nuevas víctimas y es más urgente fortalecer la solidaridad internacional hacia los presos políticos y los huelguistas irlandeses. La mejor manera de doblegar la intransigencia del gobierno de Margaret Thatcher es la realización de movilizaciones de masas en todo el mundo que exijan la salida de Irlanda de las tropas británicas de ocupación, el reconocimiento del estatuto de presos políticos a los luchadores irlandeses, y la constitución de Irlanda en república unida, laica y democrática.

Se prepara Conferencia Continental de Solidaridad con Haití

Los días 19 y 20 del pasado mes de junio de 1981 se celebró, en la ciudad de Panamá, Panamá, una conferencia preparatoria de la próxima Conferencia Continental de Solidaridad con Haití, la cual se desarrollará en la misma ciudad entre el 18 y el 20 de septiembre de este año.

Es ampliamente conocida la trayectoria criminal de la dictadura duvalierista que por más de veinte años ha gobernado a esta empobrecida nación del Caribe. Pero, también, empieza a ser conocida la existencia de una oposición cada vez más fuerte que se manifiesta tanto al interior como al exterior de Haití, y que se ha venido forjando principalmente desde 1976 al calor de una serie de luchas y de la resistencia de sectores importantes de la población.

Como respuesta al crecimiento de la oposición, el régimen duvalierista ha venido incrementando sus medidas represivas, que se caracterizan por el uso ilimitado de la violencia. Esta violencia alcanza incluso a personas que no militan en organización alguna. Testimonio de ello son los miles de refugiados en Estados Unidos. En un comunicado de prensa, el Comité Democrático Haitiano (México) denuncia que "Desde noviembre del año pasado, el régimen ha reforzado su política represiva con una persecución sistemática contra los periodistas, los sindicatos, los órganos de difusión hablados y escritos, las organizaciones culturales, los sectores políticos y religiosos, y todos aquellos que dicen no a la dictadura".

La dictadura ha tratado de suavizar su imagen vistiendo a sus fuerzas represivas —los Tontons Macoutes— con ropas informales. Pero esto no cambia la represión.

Por ello, es de gran trascendencia la existencia de una oposición que busca organizarse de la manera más amplia posible. En un boletín de prensa emitido por el Secretariado electo en la conferencia de Panamá se hace énfasis en la necesidad de aumentar estos esfuerzos. "...la tarea más urgente de nuestra organización —abierta a todos los sectores de la oposición en lucha por la liberación del pueblo haitiano— es asegurar la mayor participación haitiana a la Conferencia Continental de Solidaridad con Haití, cuyos dos principales objetivos son: avanzar en el camino de la unidad organizativa de la oposición y lograr expresiones concretas de solidaridad internacional con la causa del pueblo haitiano", señala el documento.

Apoyar estos esfuerzos en nuestro país es de fundamental importancia para el pueblo haitiano. Es necesario luchar por parar la represión en Haití y por el aislamiento del gobierno criminal encabezado por el heredero del sanguinario François Duvalier. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se solidariza con los esfuerzos que se están haciendo para organizar la conferencia a celebrarse en Panamá, y se compromete desde México a brindar sus modestos recursos y esfuerzos para apoyar la lucha de liberación del pueblo haitiano. ■

Rebeliones contra el racismo y el desempleo sacuden a Gran Bretaña

El gobierno reprime con los métodos usados en Irlanda del Norte

Por Enrique Hernández

Mientras en Irlanda del Norte continúan muriendo de inanición los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés (ERI) que se encuentran en huelga de hambre y las enormes movilizaciones populares en apoyo a éstos se enfrentan a la represión policiaca, en la propia Gran Bretaña han tenido lugar —de nueva cuenta— violentos enfrentamientos entre la policía y miles de jóvenes de las comunidades negras, principalmente en el sur de la zona metropolitana de Londres, donde se ubica la más grande de ellas.

El pasado 3 de julio, una turba de adolescentes blancos "**skinheads**" ("cabezas peladas", denominados así por su costumbre de cortarse el pelo al rape), miembros de la organización fascista National Front (Frente Nacional), al salir de un bar empezaron a atacar a los negros y asiáticos de la zona, ante la pasividad cómplice de la policía. Tras la respuesta de los agredidos y de cientos más que se les unieron en lo que no era sino un acto de legítima autodefensa, la policía cargó contra ellos. Así se inició una serie de enfrentamientos que duró varios días.

Esta erupción de violencia racista y las verdaderas rebeliones de jóvenes, sobre todo de las minorías étnicas, que le siguieron son una nítida expresión de lo que está sucediendo en Gran Bretaña bajo el gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher.

Con un nivel de desempleo que afecta al 10.6 por ciento de la fuerza de trabajo —y que entre los negros es hasta tres y cuatro veces mayor—, la juventud proletaria encuentra muy difícil su supervivencia. El desempleo es un producto de la crisis estructural que afecta desde hace años al capitalismo inglés y que hoy se complica con la peor recesión en ese país desde los años treintas. De hecho, la industria británica se encuentra en plena bancarrota. En los dos últimos años, la producción industrial ha caído en diecisiete por ciento y sólo los más optimistas esperan una leve recuperación para 1983. Aparte de esta situación ya de por sí crítica, el desempleo se ha visto aumentado por la política económica antiobrera que en su intento de enfrentar la crisis ha estado implementando el gobierno de la Thatcher.

Y, aunada a la política económica, el gobierno ha desplegado una burda demagogia racista que responsabiliza a los negros y asiáticos que habitan en Gran Bretaña por el desempleo. Esto ha envalentonado a los fanáticos fascistas del National Front, quienes han recrudecido sus ataques contra las comunidades negras y asiáticas. Uno de estos ataques costó la vida a catorce adolescentes negros que celebraban una fiesta en un barrio del sur de Londres en enero pasado.

Mientras se recrudecen las agresiones de los racistas, la policía sigue una política de hostigamiento que ya en abril de este año y, precisamente, en el mismo distrito de Brixton provocó el estallido de violentos motines.

Desde la llegada de la Thatcher al gobierno, la policía ha sido reforzada y cubierta de privilegios, con el pretexto de "la falta de seguridad en las calles". En medio de un gran desempleo, la policía ha visto incrementados sus efectivos en más de 800 elementos en lo que va del



año, según reporta una revista inglesa. Además, mientras que se imponen topes salariales a todos los trabajadores, a los policías se les aumenta el sueldo. Así, por iniciativa del Ministro de Justicia, Lord Edmund Davies, a la policía se le benefició con aumentos del noventa por ciento entre 1978 y 1980, siendo que en el mismo periodo el incremento de los precios al consumidor fue de tan sólo treinta y cinco por ciento. Ahora, Lord Davies está proponiendo que para septiembre de este año se le otorgue un nuevo aumento salarial del trece por ciento, lo que contrasta de manera indignante con el aumento de sólo seis por ciento concedido al resto de los empleados públicos.

El favoritismo hacia la policía ha motivado el descontento público —y no sólo entre los negros. Tan ha sido así que incluso una revista tan conservadora como **The Economist** escribía en un editorial publicado en su número del 4 de julio pasado —curiosamente, sólo unos días antes del inicio de los disturbios—: "los cargos de incompetencia, indisciplina, arrogancia, racismo y falta de integridad están siendo lanzados contra la policía por parte de los más moderados y responsables segmentos de la población. El actual gobierno llegó al poder con la esperanza de que al dar más apoyo y un montón de dinero a la policía colmaría los deseos de ley y orden del electorado. Esto no ha sucedido".

En un intento por negar los hechos, el gobierno de la Thatcher ha querido responsabilizar de los disturbios —al estilo de aquel **slogan** de la televisión mexicana en 1968: "son las diez, ¿sabe usted en dónde andan sus hijos?"— a la "falta de vigilancia de los padres" y a la "vagancia de los jóvenes". Tan cínico argumento exasperó a tal grado a un parlamentario del Partido Laborista que en plena sesión de la Cámara de los Comunes éste le gritó a la Thatcher: "mujer estúpida" y "usted es la vándala más grande de la historia". Igualmente, durante un recorrido de la Primera Ministra por el Puerto de Liverpool durante los disturbios, miles de manifestantes le lanzaron jitomates podridos y rollos de papel sanitario.

La verdad de las cosas es que, aparte de las provocaciones policiacas, el gobierno es plenamente responsable de lo que sucede. Precisamente, la Thatcher y su gabinete están propugnando la aprobación del Proyecto de Ley de Nacionalidad (Nationality Bill), con lo que se pretende reglamentar el derecho a la ciudadanía británica de la población negra y asiática de Gran Bretaña. Se busca quitar la nacionalidad británica —y, por lo tanto, hacer sujetos de deportación— a personas que hayan nacido en actuales o antiguas colonias inglesas y que hoy poseen pasaporte inglés. Asimismo, esta medida afectaría a los hijos de inmigrantes nacidos en Gran Bretaña.

Con todos estos antecedentes, no es extraño que se estén sucediendo tantos disturbios. Como señalábamos más atrás, ya en abril pasado se habían producido violentos enfrentamientos en Railton Road, en Brixton.

En efecto, el día 12 de abril la policía, a bordo de carros de asalto, ocupó Brixton después de que cientos de jóvenes rescataron de una patrulla policial a un jóven taxista a quien los policías acusaban, sin prueba alguna, de tráfico de drogas. Las drogas, principalmente la "ganja" —como le dicen a la marihuana en el Caribe, de donde proceden muchos de los negros residentes en Gran Bretaña—, son parte de la opresión y la cultura del **ghetto**... y la policía las utiliza constantemente como pretexto para montar sus provocaciones. De ahí la reacción tan violenta ante las continuas redadas policiacas, cuya magnitud se asemeja sólo a las del ejército inglés en Belfast o Derry. De hecho, a partir de los enfrentamientos de julio las mismas armas y maniobras, y los mismos cuerpos especiales de contrainsurgencia usados en Irlanda del Norte están siendo utilizados en Gran Bretaña contra los inmigrantes. El gobierno de Thatcher ha decidido incluso enviar policías a Irlanda del Norte para que sean entrenados por los cuerpos represivos que mantiene en esa colonia. En números anteriores de **Bandera Socialista**, cuando se explicaba la importancia de que la población de Gran Bretaña apoye la lucha por la liberación de Irlanda, ya se decía que, tarde o temprano, los cuerpos represivos montados por el imperialismo para sojuzgar al pueblo irlandés terminarían siendo usados en el propio suelo británico. Y ahora esto es ya una realidad para las minorías raciales de Gran Bretaña y en general para los jóvenes rebelados por sus condiciones de vida, pero mañana puede serlo también para toda la clase obrera británica.

Como ha dicho una miembro de un consejo de barrio en Londres, en una entrevista concedida al periódico del International Marxist Group —la sección en Gran Bretaña de la Cuarta Internacional—, en relación a los disturbios de abril pasado en Brixton: "la población negra ve a la policía como un ejército de ocupación. (El propósito de la policía) es mantener a raya a la comunidad negra. No sólo han habido arrestos arbitrarios, sino que la policía realiza arrestos violentos en público. (...) El propósito es presentar a Brixton como una zona fuera de control policial para justificar el uso de tácticas paramilitares" (**Socialist Challenge**, abril 16 de 1981).

Los enfrentamientos habidos en este mes de julio superaron por su extensión y su magnitud a los de abril. En pocos días, se habían extendido a Liverpool, Coventry, Birmingham y otras ciudades donde hay comunidades negras. Como en abril, jóvenes blancos antirracistas participaron en los combates contra la policía.

El Partido Laborista inglés, que vive un limitado pero importante giro a la izquierda como producto de la presión de las bases y principalmente de la juventud obrera que milita en sus filas, ha adoptado ante esta situación una actitud correcta, a diferencia de la que sostiene sobre Irlanda y los huelguistas del ERI, a quienes ha negado su apoyo. Y ya estamos viendo a qué se está arriesgando con ello.

La presión ha sido de tal magnitud que el gobierno ha tenido que aceptar que "algo" han de tener qué ver sus nefastas políticas en los disturbios; asimismo, Scotland Yard, el famoso cuerpo policial inglés, ha tenido que reconocer que los enfrentamientos fueron provocados deliberadamente por los fascistas. Y un informe reciente del propio gobierno muestra que disturbios como los de abril fueron provocados y posteriormente agudizados por "actitudes incorrectas de la policía".

Como en abril, el gobierno envió una comisión negociadora y se logró una tregua. Por el momento, los combates han cesado. Sin embargo, los fascistas del National Front no han sido tocados —mientras que la represión se ha centrado sobre las víctimas de las agresiones racistas— y la Thatcher no manifiesta intención alguna de cambiar su política. Al contrario, en la reunión celebrada en Ottawa, Canadá, con las cabezas de los otros seis "grandes" países imperialistas, reafirmó su propósito de continuarla. Esto augura la próxima reanudación de los combates, ante los que debemos estar alertas para impedir, de la forma que esté a nuestro alcance, que el gobierno de la facinerosa Margaret Thatcher cometa nuevos crímenes. Pero, sobre todo, está en manos del movimiento obrero británico poner un hasta aquí a las provocaciones de los fascistas, la Thatcher y la policía de "su majestad". ■

FOLLETOS BANDERA SOCIALISTA

Movimiento obrero, luchas campesinas, liberación de la mujer, marxismo, la burocracia en los estados obreros.

de venta en

LIBRERIA NUESTRA AMERICA

Baja California 71, Colonia Roma

¡Castigo a autores y patrocinadores del asesinato de Misael Núñez!

La CNTE exige se investigue al CEN y al Comité de la Secc. 36 del SNTE

Por Rafael Torres

El pasado 11 de julio se llevó a cabo la Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas (CNTE) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En dicha reunión fueron abordados la información sobre los movimientos locales, un balance de la situación actual del movimiento de insurgencia magisterial y sus perspectivas, y la elaboración de un plan de acción para el periodo de cursos intensivos en las normales superiores.

Asimismo, las discusiones se refirieron de manera central a la necesidad del esclarecimiento del asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, sobre todo una vez que la Procuraduría General de la República ha informado en la prensa de la detención de los autores materiales del crimen y de que éstos habían sido contratados por Clemente Villegas y Juan Manuel Martínez, quienes trabajaban como auxiliares del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y supuestamente ofrecieron 300 mil pesos para que se asesinara a Misael, si bien según los asesinos sólo se les entregó primero 30 mil pesos y posteriormente 60 mil pesos más.

Sin embargo, es evidente que, en un aparato sindical tan centralizado como lo es el SNTE, difícilmente dos auxiliares del CEN podrían haber llevado a cabo un plan como el mencionado sin contar con una orden de "arriba". Por lo tanto, la Asamblea Nacional de la CNTE acordó exigir públicamente que la investigación sea llevada hasta sus últimas consecuencias y que ella incluya a la dirección del grupo burocrático Vanguardia Revolucionaria, así como a los elementos de dicho grupo que son miembros del CEN del SNTE y del Comité Ejecutivo de la Sección 36 del sindicato.

Los "charros" se defienden

Los "charros", por su parte, han pretendido deslindarse del crimen. Así, en un desplegado a dos páginas aparecido el pasado 22 de julio en un diario de circulación nacional y suscrito por la dirección nacional y de las secciones del SNTE —con excepción del comité de la Sección 7 de Chiapas— se afirma que "...el Comité Ejecutivo Nacional rechaza categóricamente las aseveraciones que pretenden absurdamente involucrar a nuestra organización con los actos criminales en los que perdió la vida el compañero Misael Núñez Acosta". Posteriormente, se dice en el desplegado que los firmantes ya habían pedido la investigación exhaustiva de los hechos y se ratifica dicha exigencia.

Al respecto, en primer lugar hay que aclarar que nunca se ha planteado que esté involucrado en el crimen el SNTE como tal, sino, presumiblemente, elementos de su dirección. En segundo lugar, y lo que es más importante, en el desplegado nunca se desmiente el que los sujetos señalados como contratadores de los asesinos sean auxiliares del Comité Ejecutivo Nacional.

Ante la información que ha empezado a circular sobre el asesinato del profesor Misael Núñez y dado que la dirección sindical no ha ofrecido una explicación satisfactoria al respecto, el magisterio democrático debe exigir de manera cada vez más vigorosa la investigación exhaustiva de los hechos, que se aclare quién dio la orden de asesinar a Misael Núñez y quién dio el dinero para que se consumara el cobarde asesinato.

Este crimen no debe quedar impune. El magisterio democrático, los sindicatos, las organizaciones políticas del movimiento obrero y todos aquellos que a lo largo y ancho del país luchan por el respeto de las libertades democráticas deben secundar las exigencias levantadas por la Asamblea Nacional de la CNTE de que se investigue a los "charros" del CEN y de la Sección 36 del SNTE, y de que se castigue a los autores materiales e intelectuales del crimen en el que perdieron la vida el compañero Misael Núñez Acosta y el padre de familia Isidoro Dorantes. ■

Andrés Ugalde, víctima de una nueva agresión policiaca

El pasado 15 de julio, el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Andrés Ugalde fue nuevamente víctima de una acción policiaca. Ese día, mientras caminaba hacia las oficinas del partido —localizadas en Baja California 71—, Andrés Ugalde fue virtualmente secuestrado por unos sujetos que, sin identificarse, dijeron ser agentes de la policía.

Aunque Ugalde no fue agredido físicamente, el solo hecho de haber sido conducido en contra de su voluntad a un lugar desconocido en el que fue interrogado constituye un atentado ya no únicamente en contra de las garantías individuales sino en contra, además, de las libertades democráticas que la Constitución consagra, ya que es evidente que el compañero Ugalde fue detenido y secuestrado precisamente por su militancia en el PRT.

Precisamente, destaca el hecho de que durante el interrogatorio los propios agentes de la policía le manifestaron a Ugalde que "mucha gente no está de acuerdo con el registro del PRT" y que, por lo tanto, "el PRT la va a pasar mal". A pesar de que los agentes trataron de encubrirla diciendo que sólo requerían que el camarada les proporcionara información para la investigación sobre las amenazas que el llamado Frente Patriótico Anticomunista Nacional (FPAN) ha hecho contra dirigentes del PRT y sobre el asesinato del dirigente magisterial Misael Núñez, es obvio que se trataba o de una intimidación o de una amenaza.

Porque, en efecto, este hecho se suma a una serie de ataques de que vino siendo objeto el PRT en los últimos meses y que tuvo como un blanco constante precisamente al camarada Andrés Ugalde.

Como estuvimos informando en Bandera Socialista, a partir del momento en que el PRT inició la lucha por su registro legal como Partido Político Nacional y, más adelante, propuso la candidatura a la presidencia de la república de la señora Rosario Ibarra de Piedra —dirigente del Frente Nacional contra la Represión (FNCR)—, se levantó en su contra toda una sistemática y bien calculada campaña de intimidaciones, agresiones y provocaciones que, sin embargo, no consiguió hacer retroceder al partido un solo paso en su lucha.

El hecho que inició la mencionada campaña fue la aparición el 9 de abril en Cuautitlán, Estado de México, de un volante firmado por el FPAN en el que éste, después de atribuirse la responsabilidad del asesinato de Misael Núñez y del Secretario General del sindicato de General Electric, amenazaba de muerte a Rosario Ibarra, así como a Edgard Sánchez, Pedro Peñaloza, Rafael Torres y **Andrés Ugalde**, dirigentes del PRT, y entre otras cosas declaraba su oposición al registro del PRT.

Más adelante, el 14 de mayo, una llamada anónima hecha al local nacional del partido advirtió de la supuesta colocación en el mismo de una bomba. Afortunadamente, la advertencia era falsa.

Asimismo, el 2 de junio, otra llamada telefónica hecha al local del partido por alguien que dijo ser miembro del FPAN informaba del supuesto asesinato esa mañana, a manos precisamente del FPAN, de Andrés Ugalde. De nueva cuenta, afortunadamente, la información era falsa. No obstante, la mañana de ese día el FPAN había dejado en la **casa de Andrés Ugalde** un nuevo volante en el que reafirmaba sus amenazas.

Ahora, a poco más de un mes de haber conquistado su registro, el PRT —y particularmente Ugalde— vuelve a ser víctima de las provocaciones policiacas. Y de nueva cuenta el PRT protesta enérgicamente por la detención arbitraria de sus militantes y por la continuación de las presiones intimidatorias contra el partido, a la vez que reafirma su decisión de continuar su lucha a pesar de las mismas, a pesar de que "mucha gente no está de acuerdo" con su registro.

Responsabilizamos desde ahora al gobierno de cualquier atentado que pueda ocurrir contra la libertad o la integridad física de Andrés Ugalde. ■

Trabajadores protestan por medidas represivas de la dirección del SETSUV

En días pasados llegó a nuestra redacción una copia del desplegado publicado por la corriente Frente de Unidad Sindical (FUS) del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV, Sección 21 del Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios —SUNTU—), en el que manifiesta su posición ante una serie de prácticas que la dirección del SETSUV ha venido implementando, así como ante los hechos que el conjunto del sindicato enfrentará en el futuro inmediato.

De principio, el FUS denuncia e impugna las medidas que la Comisión de Vigilancia, el Consejo General de Representantes y el Comité Ejecutivo del SETSUV han tomado al margen de los procedimientos estatutarios y que han culminado con el despido injustificado de un trabajador de la Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana, la expulsión del sindicato de un trabajador del Centro de Investigaciones y Desarrollo Humano bajo el supuesto de que asesoró al compañero despedido en la demanda que éste interpuso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la amonestación verbal hecha a dieciocho trabajadores de distintas dependencias de la universidad por el hecho de haber manifestado y difundido sus ideas.

Más adelante, ante la próxima revisión salarial, el FUS llama al conjunto del sindicato a luchar por la obtención del cuarenta por ciento de aumento salarial y por imponer el alto a las violaciones, por parte de las autoridades universitarias, al Contrato Colectivo de Trabajo. En ese sentido, el FUS propone a la dirección sindical que el despido, la expulsión y las sanciones aplicados en contra de miembros de base del sindicato sean rediscutidos, respetando los procedimientos estatutarios, con posterioridad a la revisión salarial, ya que ésta —apunta el FUS— debe ser enfrentada de manera unida y organizada.

Asimismo, el FUS, después de reafirmar su empeño de lograr una real integración del sindicato único nacional de trabajadores universitarios, llama a la dirección del SUNTU a actuar en consecuencia y a esclarecer su posición con respecto a los hechos inicialmente mencionados, "ya que la dirección del SETSUV presenta como 'pruebas' en contra del compañero al que se aplicó la expulsión un escrito en el cual se menciona la intervención de miembros de nuestra dirección nacional".

Finalmente, ante el intento de las autoridades universitarias de crear un sindicato "blanco" que llegue a disputar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo al SETSUV, el FUS propone una ardua campaña de afiliación de los trabajadores no sindicalizados, así como orientada hacia los trabajadores que ya han sido incorporados al sindicato "blanco" para aclararles el verdadero papel de éste y así poder integrarlos a las filas del SETSUV. ■

el campesinado

(Viene de la contraportada)

policiacas y el aparato judicial para reprimir al campesinado pobre.

3. El gobierno federal y los gobiernos estatales no sólo permiten que las acciones criminales que realizan las bandas paramilitares conocidas como "guardias blancas" —al servicio de caciques y latifundistas— queden impunes, sino que, incluso, actúan en complicidad con las mismas hasta el grado de instrumentar acciones conjuntas.

4. El gobierno es responsable directo de las campañas de difamación, promovidas por medio de la prensa, de las organizaciones campesinas como "grupos guerrilleros" con las que se trata de justificar la represión contra ellas emprendida y de aislar sus luchas; es responsable, asimismo, de numerosos engaños al pueblo de México, cuando intenta presentar las agresiones emprendidas por pistoleros al servicio de caciques y latifundistas en contra de los trabajadores del campo como "enfrentamientos entre campesinos"; así como es responsable de la persecución implacable de que son víctimas los campesinos que se atreven a denunciar las agresiones de los pistoleros, y a los caciques y terratenientes que los mantienen.

Finalmente, la Conferencia Nacional de Solidaridad con las Luchas Campesinas y contra la Represión en el Campo se pronunció en apoyo a la solicitud de los campesinos guatemaltecos de ser asilados por nuestro país, ante la represión cotidiana que en su contra ejercen el ejército guatemalteco y las bandas paramilitares. Por lo tanto, la conferencia condenó al gobierno mexicano por la deportación de alrededor de 2 mil guatemaltecos que ahora corren el riesgo de ser masacrados. ■

Marcha en protesta por la agresión a la compañía Infantería Teatral

Por Norma Vázquez

En protesta por la brutal agresión sufrida el 28 de junio por los actores de la Compañía Infantería Teatral de la Universidad Veracruzana, quienes en plena representación de la obra "Cúcara y Mácara" fueron salvajemente golpeados, el pasado 20 de julio la Comisión Coordinadora de Artistas y Trabajadores de la Cultura encabezó una marcha del Monumento a los Niños Héroes a la Secretaría de Gobernación.

¿Quiénes fueron los autores de esta agresión? ¿A qué intereses responde la represión de las manifestaciones culturales? Estas fueron —y siguen siendo— algunas de las interrogantes planteadas tanto en una carta abierta dirigida al presidente de la república como en una misiva enviada a la Secretaría de Gobernación; en ambas se exigió el inmediato y total esclarecimiento de los hechos, así como el castigo a sus autores y el alto a las actividades de claro corte fascista que de manera alarmante han empezado a proliferar en todo el país.

Aunque ésta es la primera ocasión en que los artistas "dejan sus huellas por la ciudad" —como dijo Leopoldo Ayala—, la combatividad de la marcha resultó evidente. Así, durante la misma, las consignas exigieron insistentemente el cese de la represión, el respeto a la libertad de expresión y la realización de una investigación a fondo de los hechos.



Asimismo, durante el mitin frente a la Secretaría de Gobernación con que culminó la manifestación, los oradores Claudio Obregón —actor de teatro—, Rosario Ibarra de Piedra —dirigente del Frente Nacional contra la Represión (FNCR)—, Leopoldo Ayala —escritor—, Arturo Meseguer —miembro de la Compañía Infantería Teatral— y Evelio Aquino —integrante de la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala"— coincidieron en denunciar el hecho como un atentado no sólo en contra de los actores en particular, sino en general en contra de la libertad de expresión y de la vida cultural del país. Para Rosario Ibarra, sucesos de esta naturaleza reafirman la necesidad de seguir luchando por la unidad no sólo de los artistas, sino de todos los movimientos populares y democráticos del país para imponer el respeto irrestricto de todas las libertades democráticas.

Por su parte, en un saludo enviado a la marcha, los actores agredidos —ya en recuperación— reafirmaron su decisión de no dejar de hacer teatro comprometido —de seguir, hoy más que nunca, en la lucha por un teatro útil y al lado de las luchas populares.

Entre canciones y consignas, los manifestantes esperaron los resultados de las pláticas que una comisión integrada por miembros de distintos organismos mantuvo con el Subdirector de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Este, después de proponer que en lo futuro las relaciones se establecieran a través de Rosario Ibarra, en su calidad de dirigente del FNCR, prometió una "solución congruente" a las exigencias planteadas. No obstante, dicha propuesta, aceptada en principio, quedó a discusión de la Comisión Coordinadora de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Esta, por su parte, manifestó su decisión de seguir activa para impedir cualquier nueva agresión en contra de los trabajadores de la cultura, así como para exigir el respeto a la libertad de expresión y para luchar por la firme integración de los artistas en las luchas sociales que se libren en el país. ■

¡Alto a las acciones de bandas ultraderechistas!

La agresión a Infantería Teatral, un atentado contra la libertad de expresión

Con la interrupción trágica de la representación de una farsa, la noche del pasado 28 de junio el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la Ciudad de México fue el escenario de uno de los hechos políticos más condenables de los últimos tiempos.

Esa noche, el grupo Infantería Teatral de la Universidad Veracruzana escenificaba la primera de dos puestas en escena de la obra "Cúcara y Mácara" con que ese día debía continuar la segunda temporada de presentación de esa obra en la Ciudad de México. Sin embargo, ni la primera función llegó a concluir ni la segunda temporada pudo continuar: en medio de la función, un grupo de cuarenta a sesenta jóvenes —de entre diecisiete y veintitrés años, y con vestimenta y apariencia "clasemedieras"— armados con palos, macanas, botellas, varillas, tubos y chacos subió al escenario al grito de "¡Guadalupanos!", y golpeó salvajemente (y el calificativo se queda corto) a cinco de los actores —entre ellos, y con particular saña, a Enrique Pineda, director de la obra—, persiguió a los restantes, destrozó los camerinos y, ante una orden, se retiró del teatro.

¿De qué trata "Cúcara y Mácara"? ¿Por qué su representación generó tan violenta reacción?

Cúcara y Mácara son dos parroquianas a quienes, según esto, se les aparece la virgen del Siquitibum. A partir de entonces, la imagen de la virgen pasa a formar parte de toda la serie de símbolos y mitos de la iglesia del lugar. Sin embargo, en alguna ocasión, el estallido de una bomba colocada en el templo la destruye. La pérdida de la misma pone al cardenal, al obispo, a los sacerdotes, al ministro y a las monjas ante la disyuntiva de dar o no a conocer al pueblo la noticia. Finalmente, deciden construir una copia de la imagen de la virgen y hablar al pueblo de un milagro que impidió la destrucción de la imagen.

Resulta obvio que tal obra sólo pudo provocar la reacción indignante e irracional de fanáticos ultraderechistas. Los antecedentes, aún no se sabe si directos o indirectos, de la agresión de que fueron víctimas los miembros de la Infantería Teatral de la Universidad Veracruzana son ilustrativos al respecto.

En efecto, la obra suscitó en la ciudad de Xalapa toda una serie de reacciones enfermas poco después de su estreno en el Teatro del Estado de dicha ciudad los primeros días de diciembre de 1980.

Así, el 24 de enero, al finalizar una de las representaciones, alrededor de cincuenta católicos que habían asistido a la misma lanzaron vivas a la Virgen y entonaron el Himno Guadalupano. Al informar del hecho desde las páginas de **El Sol de Xalapa**, Renato D'Aquino (¡!) Rosas comentó: "...muy fácil hubiera sido informar al mayor número de personas sobre el contenido de la obra y apelar a los participantes".

Asimismo, en su edición del 25 de enero, el periódico **El Tiempo**, después de acusar a la obra de antipatriótica y de descalificarla ("los actores son de ínfima categoría"), exigía a las autoridades que prohibieran "la exhibición de las obras de esta clase ya que atentan contra las instituciones del Estado y la Iglesia".

De nueva cuenta, el 28 de enero, desde las páginas de **El Sol de Xalapa**, D'Aquino Rosas hacía referencia a la obra "Cúcara y Mácara" como "Ofensiva e irrespetuosa con los sentimientos patrios y religiosos del pueblo mexicano...". Similar posición adoptó el **Diario de Xalapa**.

Más adelante, cuando la obra se representó por primera vez en la Ciudad de México, las reacciones suscitadas sólo parecieron ser una continuación de las manifestadas en Xalapa.

Para comenzar, una llamada anónima hecha a la taquilla del teatro advirtió del ametrallamiento del local si la obra se presentaba.

Igualmente, el semanario **Mi Ciudad** reprodujo las declaraciones del sacerdote Manuel Ponce, prelado de la Basílica de Guadalupe, en el sentido de que "se debería levantar una campaña contra ella (la obra), ya que es un atentado en contra de la verdad, la religión Católica y la Virgen de Guadalupe. Mofas de esta naturaleza deben ser paradas de inmediato...".

Finalmente, el pasado 7 de julio —esto es, algunos días después de la agresión— desde las páginas de **La Prensa** M.P. D'Harcourt responsabilizó a los actores de "Cúcara y Mácara": "de todas las posibles reacciones que puedan seguir despertando de continuar escupiendo sobre el alma metafísica de la patria". (Para una información más detallada de los hechos, leer la excelente crónica que Antonio Saborit publicó en la edición del 22 de julio del suplemento de **Siempre!**)

Si estos ataques tienen una relación directa o indirecta con la criminal agresión que sufrieron los actores de Infantería Teatral es algo que todavía está por esclarecerse. Pero lo que es innegable es que, por lo menos, los "periodistas" de los diarios mencionados y el prelado de la Basílica de Guadalupe alentaron abiertamente la acción criminal. Es indudable también que esta agresión fue bien orquestada y que detrás de ella están personas ligadas a la iglesia como las que se han encargado de organizar grupos oscurantistas como los "pro vida" para combatir el derecho de las mujeres a contar con la oportunidad legal de abortar; hoy combaten el derecho de los artistas a expresarse libremente. Todos sabemos que la iglesia ha promovido anteriormente actos de salvajismo. ¿Ha decidido llevar su intolerancia a acciones más fuertes para hacer respetar "el alma metafísica de la patria"?

Y el hecho más alarmante en todo esto es precisamente la proliferación de bandas fascistoides que venimos presenciando en el país. Toda persona que defienda sus derechos puede ser víctima de este tipo de pandillas. Si permitimos que bandas como la que agredió a Infantería Teatral se envalentonen ante la pasividad del gobierno y de las fuerzas democráticas, la tragedia del Juan Ruiz de Alarcón puede repetirse en proporciones gigantescas. Es el momento de detenerlas.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) exige que las autoridades gubernamentales investiguen realmente los hechos, que se presenten públicamente los resultados de dicha investigación y que se castigue a los responsables; asimismo, debe esclarecerse la procedencia de estos grupos y ponerse un alto a sus actividades.

El PRT llama a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden los derechos democráticos a no permitir que una vez más el gobierno deje todo en el silencio, y a comenzar a discutir las formas en que haremos frente de manera común a estas bandas ultraderechistas que amenazan con cobrar más víctimas. ■

en dónde encontrarnos

Si estás de acuerdo con lo que planteamos en este periódico, ¡únete al PRT! Si deseas más información, puedes escribirnos (a nombre del Director de Bandera Socialista) al Apartado Postal 11-423, México 11, DF. También puedes acudir a uno de nuestros locales, en las siguientes direcciones:

Baja California Norte
Tijuana: Av. Madero 807, Interior 6.

Baja California Sur
La Paz: Av. Independencia, entre Isabel la Católica y Félix Ortega, Local 2.

Colima:
Colima: Medellín 330.

Chiapas
Tuxtla Gutiérrez: 1a. Norte-Oriente 1063

Distrito Federal
Baja California 71, Colonia Roma, ZP 7. Tel. 584 9208.

Guerrero
Chilpancingo: Amado Nervo 18. Tel. 2 59 76.

Jalisco
Guadalajara: Morelos 516, Desp. 1, Sector Hidalgo.
Cihuatlán: E. Zapata 22.

Morelos
Cuernavaca: Av. López Mateos 131, Int. 5, lado norte del Centro Comercial.

México (Edo. de México)
Toluca: Venustiano Carranza 204 A.
Cuatitlán Izcalli: Cedro 236, Colonia La Aurora.

Oaxaca
Oaxaca: Pino Suárez 508 A.

Sinaloa
Culiacán: Agustina Ramírez 1813, Colonia Tierra Blanca.

Sonora
Hermosillo: Oaxaca 68, Zona Central.
Ciudad Obregón: California 834 Sur.

Tamaulipas
Ciudad Victoria: 12 y 13 Canales 513 interior, Colonia Mainero.

Veracruz
Palmarillo: Kilómetro 73 de la Carretera Federal Córdoba-Veracruz. Domicilio conocido, Ejido de Palmarillo, Municipio de Cotaxtla.

Bandera Socialista

Se realizó conferencia de solidaridad con el campesinado

Treinta campesinos presos de la CNPA en huelga de hambre

Por Alfonso Chanes

En días pasados, treinta presos políticos campesinos miembros de la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) se declararon en huelga de hambre indefinida para exigir:

1. La libertad inmediata de los cincuenta y tres campesinos miembros de la CNPA presos por motivos políticos.
2. La presentación inmediata de doce campesinos "desaparecidos".
3. La disolución inmediata de las "guardias blancas", y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de crímenes contra campesinos.
4. La solución inmediata y favorable a los 315 expedientes agrarios presentados por la CNPA el pasado 12 de mayo.

Sin embargo, el pasado 21 de julio, los campesinos presos de la comunidad indígena de Venustiano Carranza, Chiapas, que se encontraban en huelga de hambre fueron sacados de la cárcel, junto con ocho presos comunes, y fueron torturados para obligarlos a denunciar a quienes supuestamente los habían "alentado" para que se declararan en huelga de hambre.

Este hecho fue denunciado por la CNPA ante el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), el que, en su plenario nacional realizado el pasado 4 de julio, acordó respaldar todas las iniciativas impulsadas por la CNPA y levantar un movimiento de apoyo solidario a las luchas campesinas. De esta forma, el 27 de julio se habrá realizado un mitin frente a la Secretaría de Gobernación para exigir una respuesta inmediata a las demandas planteadas por la CNPA.

Porque, en efecto, la huelga de hambre forma parte de toda una campaña del movimiento campesino independiente para poner un alto a la represión en el campo.

Así, el pasado 20 de julio se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Nacional de Solidaridad con las Luchas Campesinas y contra la Represión en el Campo. Dicha conferencia se constituyó en un foro de denuncia y condena de la política antiagrarista y represiva del régimen de López Portillo. Más de veinticinco representaciones de diversas organizaciones sindicales y políticas manifestaron su apoyo a la jornada nacional de denuncia de la represión en el campo mexicano que la CNPA ha venido impulsando desde el pasado 12 de mayo, día en que se realizó la primera acción unitaria de un conjunto de organizaciones campesinas de carácter regional surgidas en los últimos años al calor de la lucha y que hoy se encuentran agrupadas en la CNPA.

El largo proceso de reorganización del movimiento campesino independiente ha empezado a madurar, y éste ha comenzado a desarrollar acciones de cada vez mayor envergadura. Más de treinta encuentros campesinos de carácter local, regional y nacional han posibilitado el surgimiento y la consolidación de una vanguardia campesina que se esfuerza por hacer avanzar la conciencia de las masas campesinas sobre la base de la construcción de un proyecto de centralización nacional de las distintas luchas que libran el campesinado pobre y los jornaleros agrícolas.

La política del gobierno mexicano en el sentido de dar por terminado el reparto agrario, cuando la existencia de grandes latifundios es una realidad que afecta a millones de campesinos; de pretender entregar —mediante la reaccionaria Ley de Fomento Agropecuario (LFA)— la tierra y el trabajo de los comuneros y ejidatarios al gran capital nacional y extranjero; y de intensificar el despojo de tierras mediante medidas cada vez más represivas fue denunciada en dicho foro.

Asimismo, una larga cadena de denuncias presentadas por representantes de diferentes organizaciones campesinas permitió poner al descubierto la naturaleza represiva del estado mexicano.

La represión del legítimo descontento y la negación de los más elementales derechos democráticos de los campesinos son una realidad cotidiana: las autoridades ejidales, comunales y municipales son impuestas por los caciques, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Confederación Nacional Campesina (CNC); las asambleas y manifestaciones son baleadas por la policía y las bandas paramilitares conocidas como "guardias blancas"; las órdenes de aprehensión, los encarcelamientos, las torturas y los secuestros son usados permanentemente contra los campesinos en lucha. Un ejemplo de ello es el ametrallamiento, el pasado 21 de julio, de una marcha campesina que de manera pacífica se realizaba en el poblado de Tlacolula, Municipio de Chicontepec, Veracruz, en protesta por el saqueo de las casas de los campesinos que realizó la policía que tiene su sede en Tempuala. Durante la agresión fueron asesinados Aurelio Bautista Bautista, Rosario Montes Vicencio, Marcial Antonio, Yolanda Cruz y, según algunos informes, seis campesinos más, además de que hubieron numerosos heridos.



La respuesta del gobierno a las constantes denuncias que la CNPA ha hecho y, particularmente, a las presentadas el pasado 12 de mayo ha sido la negligencia y la negativa para solucionar de manera satisfactoria los 315 expedientes agrarios presentados ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), y la negativa a responder a la exigencia de que sean liberados más de setenta campesinos presos por motivos políticos y de que sean presentados doce campesinos "desaparecidos". Todo lo contrario. Desde la realización de la marcha del 12 de mayo la represión ha cobrado nuevas víctimas: cuatro campesinos han sido asesinados, así como "desaparecidos" otros seis y agredidos físicamente ocho más.

La conferencia concedió particular importancia a la denuncia de la situación que enfrenta el movimiento campesino independiente en el Estado de Hidalgo. Así, mientras el gobernador Rossell de la Lama promueve una ley de amnistía y declara constantemente su "preocupación por resolver el problema de La Huasteca", los campesinos Rutilio de la Cruz, Natalio Hernández Cerecedo y Paulino Hernández Cerecedo, liberados de la cárcel de Pachuca el año pasado, fueron secuestrados el 20 de mayo de este año por pistoleros de los caciques de la región. Natalio y Paulino Hernández Cerecedo fueron sacados violentamente de sus casas en Chapaltepec, Calnali, por Fermín Pérez, Adán Pérez y Alfonso Mercado, quienes llegaron disfrazados de soldados y armados con ametralladoras. Por otra parte, en Huejutla fueron secuestrados Cecilio Martínez Hernández, Bartolo Martínez y Rosalino Méndez —los dos primeros, autoridades del ejido La Mesa de Limantitla— por pistoleros del cacique Gilo Martínez y la policía judicial del estado. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

Frente a todos los testimonios presentados y ante los intentos del gobierno mexicano de eludir su responsabilidad directa en la represión al movimiento campesino independiente, la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" declaró:

1. El gobierno de López Portillo es responsable de las agresiones que hoy día sufren los trabajadores del campo, por negarse a resolver las demandas por éstos presentadas y por proteger a ultranza los intereses de los caciques y latifundistas.
2. Asimismo, el gobierno es responsable directo de la constante utilización de las corporaciones

(Pasa a la página 6)

Guerrero: exitosa marcha en apoyo a Copalillo y a la UAG

El pasado 16 de julio se realizó en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, una combativa manifestación que culminó con un mitin frente al Palacio de Gobierno. Inicialmente, la marcha había sido convocada por la Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA) y por el Frente Estatal contra la Represión (FECR) en apoyo al pueblo de Copalillo. Sin embargo, terminó siendo una manifestación unitaria con los universitarios guerrerenses, quienes al llamado del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) acudieron para manifestar su apoyo a las diferentes luchas que se desarrollan en el estado y para exigir un aumento en el subsidio a la UAG.

A pesar de las dificultades que se tuvieron para coordinar esfuerzos, la marcha fue todo un éxito. Más de 10 mil personas expresaron su voluntad de continuar la lucha por el camino de la unidad y la movilización, y de sumar fuerzas para rodear de solidaridad al pueblo de Copalillo, Guerrero, a los colonos de "El Anfiteatro" de Acapulco y a todas las luchas que se desarrollan en el estado.

Con una movilización permanente, expresada en asambleas populares y mítines que reúnen a miles de personas, los copalillenses han venido demostrando su repudio al Concejo Municipal espurio que les ha sido impuesto, al mismo tiempo que han venido planteando su exigencia al gobierno de convocar a nuevas elecciones. Tanto la Cámara de Diputados como el gobierno locales pretenden negar el aislamiento en que se encuentran sus títeres y promueven "manifestaciones" con personas ajenas al Municipio de Copalillo. Al mismo tiempo, envían a diputados y otros personeros a hacer demagogia sobre que se dará una inyección extraordinaria de recursos al Concejo impuesto, todo ello con la intención de lavar la deteriorada imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio.

Pese a todas estas maniobras, para los copalillenses resulta claro el verdadero rostro de la antidemocrática política oficial cuando perciben el continuo patrullaje de elementos de los batallones de infantería Vigesimoséptimo y Trigésimoquinto, especializados en contrainsurgencia, que prácticamente han impuesto un sitio a la población.

La Coordinadora Nacional "Plan de Ayala", por su parte, se hace partícipe de las demandas de los copalillenses y exige al gobierno de Cervantes Delgado que dé una solución democrática a éste y a los demás conflictos existentes en el Estado de Guerrero. ■

Por Alfonso Chanes